Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se adiciona un nuevo contenido a la fracción XIX, recorriendo el actual a la fracción XX, que se crea, del apartado A del artículo 9 de la **Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza.**

* **Con la finalidad de establecer las atribuciones precisas del gobernador del estado en materia de pensiones vitalicias.**

Planteada por la **Diputada Luz Natalia Virgil Orona**, del Grupo Parlamentario “Carlos Alberto Páez Falcón”, del Partido Acción Nacional.

Fecha de Lectura de la Iniciativa: **14 de Junio de 2022.**

Turnada a la **Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.**

**Fecha de lectura del dictamen:**

**Decreto No.**

Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado:

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE. –**

**Iniciativa que presenta la diputada Luz Natalia Virgil Orona conjuntamente con los diputados del Grupo Parlamentario “Carlos Alberto Páez Falcón”; de conformidad a las atribuciones establecidas en los artículos 59 Fracción I, y 67 Fracción I Y IV de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y con fundamento en los artículos 21 Fracción IV, 152 fracción I y 159 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso Local, presentamos** **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO por la que se adiciona un nuevo contenido a la fracción XIX, recorriendo el actual a la que fracción XX, que se crea, del apartado A del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, con base en la siguiente:**

**Exposición de motivos**

**Facultades Discrecionales: Su Límites y Naturaleza**

Las facultades discrecionales de las autoridades, de acuerdo con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, revisten los siguientes elementos:

Décima Época; Registro digital: 2008759

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tesis Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, marzo de 2015, Tomo III; Materia(s): Administrativa

Tesis: I.1o.A.E.29 A (10a.)

Página: 2316

**ACTO ADMINISTRATIVO DISCRECIONAL. SUS ELEMENTOS REGLADOS.**

Los elementos reglados de un acto administrativo emitido conforme a potestades discrecionales consisten en: a) el propio margen discrecional atribuido a la administración (entendido como el licenciamiento o habilitación preconfigurada por la ley) y su extensión; b) la competencia para ejercer esas facultades; c) el procedimiento que debe preceder al dictado del acto; d) los fines para los cuales el orden jurídico confiere dichas atribuciones; e) la motivación en aspectos formales y de racionalidad; f) el tiempo, ocasión y forma de ejercicio de aquéllas; g) el fondo parcialmente reglado (personas, quántum, etcétera); h) los hechos determinantes del presupuesto; y, i) la aplicación de principios.

Décima Época; Registro digital: 2002304

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 2; Materia(s): Común

Tesis: IV.3o.A.26 A (10a.)

Página:1331

FACULTADES DISCRECIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN. LOS ADMINISTRADOS TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR SU EJERCICIO CUANDO AFECTEN SUS DERECHOS.

El Estado Mexicano, al ser un Estado de derecho constitucional democrático, condiciona toda actuación de la autoridad pública al imperio de la ley y, por ende, al control jurídico del ejercicio del poder, porque sólo a través de éste se constata si aquélla se ajusta al orden jurídico y corresponde con los fines del Estado. La facultad discrecional, desde esa óptica, no supone la libertad de la administración para actuar prescindiendo de la necesidad de justificar la realidad de la actuación concreta. Por tanto, en el acto administrativo debe integrarse lo que es discrecional de lo que es regla de derecho que le rodea, para encausarlo, dirigirlo y, sobre todo, limitarlo. Tal situación pone de manifiesto la vinculación de la administración al ordenamiento jurídico. Así, la discrecionalidad debe partir del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, el cual postula una distinción neta entre arbitrariedad y discrecionalidad, entre lo que es fruto de la mera voluntad o el puro capricho de los administradores y lo que, por el contrario, cuenta con el respaldo -mayor o menor, mejor o peor, es otra cuestión- de una fundamentación que lo sostiene. Esto es, discrecionalidad no es arbitrariedad, nunca es permitido confundir, pues aquello (lo discrecional) se halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes, discutibles o no, pero considerables en todo caso, y no meramente de una calidad que lo haga inatacable, mientras que lo segundo (lo arbitrario), o no tiene motivación respetable, sino -pura y simplemente- la conocida sit pro ratione voluntas o la que ofrece lo es tal que escudriñando su entraña, denota, a poco esfuerzo de contrastación, su carácter realmente indefinible y su inautenticidad. De esta forma, como la facultad discrecional está limitada por el respeto irrestricto a los derechos humanos, su ejercicio es un acto de poder que debe estar fundado y motivado. Por tanto, los administrados poseen interés jurídico para controvertirlo cuando afecte sus derechos.

Registro digital: 2008770

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Décima Época

Materias(s): Administrativa

Tesis: I.1o.A.E.30 A (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, página 2365

Tipo: Aislada

FACULTADES REGLADAS Y DISCRECIONALES. SUS DISTINTOS MATICES.

La división de facultades regladas y discrecionales no es categórica o pura, sino que hay facultades discrecionales fuertes que confieren una gran libertad para tomar decisiones o crear disposiciones, frente a otras débiles, donde esa libertad está delimitada por determinados principios o estándares, conceptos jurídicos indeterminados o supuestos predeterminados. Por su parte, las facultades regladas pueden serlo en distintos niveles, donde la norma indica con detalle y concreción lo que debe hacerse o no hacerse y, en otros casos, el uso de algún concepto jurídico indeterminado o vaguedad en las disposiciones permite y obliga a la autoridad a tomar la mejor decisión. En todos los casos, debe existir una motivación, la cual tiene que estar ligada a la consecución de un interés público, realizada en forma objetiva, técnica y razonada, excluyendo toda posibilidad de arbitrariedad; de ahí que las facultades discrecionales deben estar enmarcadas y constreñidas a satisfacer ciertos fines y conforme a referentes elementales.

Registro digital: 160855

Instancia: Primera Sala

Décima Época

Materias(s): Constitucional, Común

Tesis: 1a. CLXXXVII/2011 (9a.)

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, página 1088

Tipo: Aislada

FACULTADES DISCRECIONALES DE LAS AUTORIDADES. LIMITACIÓN A SU EJERCICIO.

El otorgamiento de facultades discrecionales a las autoridades no está prohibido, y ocasionalmente su uso puede ser conveniente o necesario para lograr el fin que la ley les señala; sin embargo, su ejercicio debe limitarse de manera que impida la actuación arbitraria de la autoridad, limitación que puede provenir de la propia disposición normativa, la cual puede establecer determinados parámetros que acoten el ejercicio de la atribución razonablemente, o de la obligación de fundamentar y motivar todo acto de autoridad.”

En suma, las facultades discrecionales de las autoridades, contrario a lo que muchos creen, no son atribuciones que se pueden “deducir o inferir” de modo arbitrario; sino que deben estar plasmadas en la ley, y si bien le pueden conceder a la autoridad un amplio margen operativo para tomar decisiones; el origen de esta capacidad debe ser una disposición legal que le confiera expresamente la facultad discrecional que invoca para un ejercicio determinado.

Por otra parte, las facultades discrecionales deben respetar en su ejercicio los extremos de los derechos humanos, y los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica, pues no se trata de atribuciones que escapen a dichas limitantes como en el caso de las facultades regladas.

Deben, además, cumplir con los principios de fundamentación y argumentación.

**Las Pensiones Vitalicias**

En los poderes ejecutivos de las entidades federativas, sus titulares, es decir, los gobernadores, poseen entre sus atribuciones la de conceder pensiones vitalicias. El objetivo de dichas erogaciones a cargo del erario estatal es generalmente el siguiente:

1. Conceder un apoyo económico (pensión vitalicia) a personas que se destacaron por su servicio al estado en algún rubro en concreto o en el propio servicio público. Generalmente, predomina en la asignación de dichas pensiones el criterio de “destacarse en el servicio público, o haber entregado la mayor parte de la vida a este, sin haber alcanzado el titular o su viuda o viudo una pensión oficial y conforme a derecho que sea digna.
2. Brindar el mismo beneficio antes mencionado a viudas o viudos de personas caídas en el cumplimiento de su deber, cuando, por ley, no alcanzan una pensión, o el monto de esta es insuficiente. Criterio generalmente aplicado en cargos públicos de alto rango, como secretarios del ramo, subsecretarios y directores.
3. En algunos, casos, como ya sucedió en el pasado en Coahuila, se concede a las viudas de agentes del orden caídos en el cumplimiento de su deber, cuando, la pensión que les toca por ley es de un monto muy bajo, insuficiente para que se puedan atender las necesidades básicas de la familia.
4. Desde luego, las pensiones vitalicias concedidas a personajes ilustres de la comunidad, que destacaron en aspectos como el arte, la cultura, el deporte, la ciencia, la docencia, el servicio a la comunidad y otros, son también comunes en las entidades federativas, ya que sea que se le otorguen al titular en vida o a su viuda o viudo.

Cabe destacar que, en ciertos casos, las pensiones, pueden ser concedidas a padres, madres o hijos, ante la ausencia de una pareja.

**El Conflicto con las Pensiones Vitalicias**

Si bien la asignación de una pensión vitalicia es una facultad discrecional de los jefes de los poderes ejecutivos locales; en los hechos dicha atribución no escapa al escrutinio público y a la controversia por diversos motivos, entre otros:

I.- Se conceden, en muchos o en casi todos los casos, sin estudios o valoraciones socio económicas que justifiquen su otorgamiento, especialmente cuando se confieren a personas que en realidad poseen (de manera evidente) un alto nivel económico y medios de subsistencia suficientes.

II.- Los montos asignados tampoco son producto de un análisis y valoración realizada sobre la situación del beneficiario.

III.- Existe inequidad al entregarse pensiones vitalicias a personas que realmente no las ameritan, mientras que existen otras que reúnen todos los elementos ya mencionados (servicio destacado, méritos, aportación a la comunidad, necesidad económica…) y características para ser merecedores de tal beneficio.

**Falta de Regulación y Derecho Comparado**

Como lo mencionamos a inicio de esta exposición de motivos, las facultades discrecionales, para ser plenamente legales y constitucionales, deben estar plasmadas en la ley.

Por otra parte, analizamos por derecho comparados la legislación de varios estados de la República, encontrando lo siguiente:

**Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California**

**ARTÍCULO 27.-** Son facultades del Congreso:

XXIX.- Conceder pensiones a los familiares de quienes hayan prestado servicios eminentes al Estado, siempre que su situación económica lo justifique;

….

**Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua**

ARTICULO 64. Son facultades del Congreso:

1. Otorgar premios o recompensas a los individuos que se hayan distinguido por servicios eminentes prestados al Estado o a la humanidad; conceder auxilios o pensiones a las viudas o huérfanos de los que hubieren fallecido siendo merecedores de aquellas recompensas sin haberlas recibido y declarar beneméritos del Estado a aquellos individuos, siempre que hayan transcurrido diez años desde su fallecimiento;
2. Conceder pensiones a los servidores del Estado que queden incapacitados total o parcialmente para el trabajo con motivo de sus actividades o funciones; y a sus viudas o huérfanos cuando aquellos perdieran la vida por la causa expresada;

Así mismo, a los miembros pertenecientes a los grupos de voluntarios integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil del Estado de Chihuahua, que presten un servicio no remunerado y que por motivo de su actividad, queden incapacitados total o parcialmente para el trabajo o funciones; y a sus viudas o huérfanos cuando aquéllos perdieran la vida por los mismos motivos…

**Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa:**

143…

IV.- No se concederán, ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado; y,

**Constitución del Estado de Jalisco:**

**Artículo 35**.- Son Facultades soberanas del Congreso:

XXVII. Otorgar recompensas a los que hayan prestado servicios de importancia a la humanidad o al Estado, siempre que, al concederlas, no ocupen altos puestos gubernativos; conceder pensiones a los deudos de los que hayan fallecido siendo merecedores de aquellas recompensas;

XXVIII. Declarar beneméritos del Estado de Jalisco a sus benefactores y a los que se hayan distinguido por servicios eminentes prestados a la República y a la Entidad, cuando menos diez años después

**Constitución del Estado de Tamaulipas:**

**ARTÍCULO 58.-** Son facultades del Congreso:

…

**XIV.-** Decretar pensiones en favor de las familias de quienes hayan prestado servicios eminentes al Estado; a los empleados del mismo por jubilación, y al cónyuge supérstite e hijos de los servidores públicos pertenecientes a las instituciones policiales y de procuración de justicia del Estado que hayan perdido la vida en cumplimiento de su deber;

**ARTÍCULO 91.-** Las facultades y obligaciones del Gobernador son las siguientes

….

**XLI.-** Conceder pensiones dentro o fuera del Estado a los estudiantes que acrediten que no pueden sostenerse de por sí;

**Constitución del Estado de Michoacán:**

XVI bis.- Legislar en materia de políticas de sueldos, salarios y prestaciones, bajo los principios de racionalidad, austeridad, proporcionalidad, equidad, certeza y motivación, que eviten excesos y discrecionalidad de las autoridades, garantizando la participación de órganos colegiados en la definición de criterios, políticas y lineamientos en la materia. A lo que se sujetarán los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos y entidades de la Administración Pública Paraestatal; (REFORMADA, P.O. 14 DE ABRIL DE 2009)

XVII.- Conceder honores, premios y recompensas a las personas que presten servicios eminentes a la República o al Estado, con la aprobación de las dos terceras partes de los diputados presentes; (ADICIONADA, P.O. 14 DE ABRIL DE 2009)

XVII bis.- Conceder pensiones, en casos de excepción, conforme a los procedimientos y formalidades que establezca la ley de la materia, con la aprobación de las dos terceras partes de los diputados presentes;

**Consideraciones Finales**

En atención a todo lo expuesto, consideramos que si bien es verdad que la atribución del Jefe del Ejecutivo para otorgar pensiones vitalicias reviste un carácter discrecional, especialmente cuando se trata de que sea él quien decida a quién otorgarle dicho beneficio; lo cierto es que debe ser una facultad regulada en la ley, y que las pensiones vitalicias sean concedidas sobre bases que lo justifiquen en cada caso.

Por todo lo expuesto, tenemos a bien presentar la presente iniciativa con proyecto de:

**DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO:** Se **adiciona un nuevo contenido a la fracción XIX, recorriendo el actual a la que fracción XX, que se crea, del apartado A del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza**, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 9…**

**A…**

**I a la XVIII…**

**XIX.**  **Someter a la aprobación del Congreso, o en su caso, a la diputación permanente, la asignación de pensiones vitalicias a las personas o sus familias, que hayan prestado servicios eminentes al estado, se hayan destacado en actividades humanitarias o laborado al servicio de la seguridad pública, siempre que se justifique dicha necesidad.**

**XX. Las que con ese carácter le confieran la Constitución Federal, la Constitución Política del Estado y las leyes aplicables.**

**…**

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO. -** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

**SEGUNDO. -**  Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

**SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO**

**DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

Saltillo, Coahuila de Zaragoza,

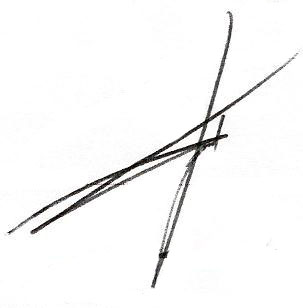
A 14 de junio de 2022

Atentamente:

**“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA, Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”.**

**GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL**

**“CARLOS ALBERTO PÁEZ FALCÓN”.**

**DIP. LUZ NATALIA VIRGIL ORONA**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**DIP. RODOLFO G. WALSS AURIOLES DIP. MAYRA LUCILA VALDÉS GLZ.**